

**2.18. JURISPRUDENCIA AMBIENTAL EN NAVARRA (pp. 2-9)**

—

**2.18. JURISPRUDÈNCIA AMBIENTAL A NAVARRA (pp. 10-17)**

JOSÉ FRANCISCO ALENZA GARCÍA

*Profesor titular de Derecho Administrativo / Professor titular de Dret Administratiu*

*Universidad Pública de Navarra*

**Sumario:** 1. Introducción. 2. Delito ecológico. 3. Participación ciudadana y legitimación en materia ambiental. 4. El sonido de campanas de una iglesia es un uso tolerable y perteneciente a la tradición cultural española. 5. Responsabilidad por daños causados por fauna silvestre. 6. Relación de sentencias comentadas. 6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo). 6.2. Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo. 6.3. Sentencias de Juzgados de lo Penal

## **1. Introducción**

Ha habido un notable número de sentencias de contenido ambiental en los tribunales navarros durante el segundo semestre del 2010. Sin embargo, no han sido resoluciones demasiado relevantes desde el punto de vista de la interpretación del derecho ambiental. En muchas de ellas lo determinante ha sido la prueba. En otras, se alegaban meras irregularidades del procedimiento sancionador o autorizador que eran rechazadas.

En esta crónica voy a destacar, en primer lugar, las sentencias de lo penal. Una es condenatoria y la otra absolutoria. Esta última es la más interesante por la interpretación que hace del tipo penal aplicable.

También ha sido llamativo que tres sentencias hayan tenido que pronunciarse sobre distintos aspectos de la participación y la legitimación ambientales, y lo han hecho, como se verá, con un criterio bastante restrictivo.

Otra sentencia muy curiosa se ha pronunciado sobre el ruido causado por las campanas de una iglesia, admitiendo ese uso como tolerable y perteneciente a la tradición cultural española, si bien lo determinante ha sido el cumplimiento escrupuloso de la Ordenanza municipal que establecía un régimen especial para las campanas de las iglesias.

Finalmente, aludo a varias sentencias de los Juzgados de lo Contencioso sobre reclamaciones de responsabilidad por daños producidos a vehículos como consecuencia de accidentes provocados por fauna silvestre cinegética.

## **2. Delito ecológico**

En esta materia han recaído dos sentencias de los Juzgados de lo Penal. En una se impone una condena por delito contra la fauna por cazar especies amenazadas (ranas

bermejas) (Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Pamplona, de 30 de septiembre de 2010).

La otra tiene más interés al establecer un criterio restrictivo de interpretación del tipo penal aplicable. El artículo 336 CP sanciona conductas de utilización de venenos o explosivos para la caza o la pesca, así como “de otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna” sin estar legalmente autorizado. Considera la Sentencia que esto significa que no todos los métodos ilegales de caza están incluidos en el tipo penal, pues este solo se refiere a los más graves y de mayor eficacia destructiva (venenos, explosivos), que pueden afectar a cualquier especie, e incluso al agua y a la tierra, y pueden, además, mantener sus efectos negativos y lesivos durante mayor tiempo. En el caso concreto se habían utilizado cepos armados con cebo de hormigas de ala para capturar pájaros. La Sentencia considera que, aunque en la actualidad es un método prohibido, se trata de un sistema tradicional de caza que dista mucho de tener similar eficacia destructiva que los expresamente incluidos en el CP, por lo que absuelve al acusado de este delito (Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Pamplona, de 10 de junio de 2010).

### **3. Participación ciudadana y legitimación en materia ambiental**

En este ámbito se han producido tres sentencias. En ellas se puede apreciar un criterio restrictivo y muy limitado de las posibilidades de participación de los ciudadanos que la legislación ambiental pretende consolidar y generalizar.

La STSJ de Navarra de 2 de junio de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\337715), trata del recurso contra un plan sectorial de incidencia supramunicipal para la implantación de un “Área de Actividades Económicas”. Entre los varios motivos de impugnación interesa destacar el basado en la infracción del derecho de información y participación en procesos que afecten al ambiente. Entendía el recurrente que el proyecto sometido a información pública y el aprobado posteriormente eran de naturaleza esencialmente distinta, y, por lo tanto, hubiera requerido un nuevo trámite de información pública. La sentencia recuerda el criterio jurisprudencial de que la alteración sustancial de los planes no es meramente cuantitativa, sino de concepto.

Añade que, en este caso, no se ha alterado la ubicación del proyecto, el cual no contiene otras afectaciones, sino que estas se restringen dado que se ha reducido la extensión del Plan a menos de la mitad del espacio inicialmente proyectado. En consecuencia, se rechaza cualquier vulneración del derecho de participación en procesos ambientales.

En la STSJ de Navarra de 27 de abril de 2010, ponente Pueyo Calleja (JUR 2010\299240), se trató de la creación de un acotado para su aprovechamiento micológico por parte de un ayuntamiento. Tras desechar otros argumentos del recurrente, la Sala se enfrenta al incumplimiento del plazo de un mes de información pública que venía fijado en el Reglamento de Montes. Pues bien, para la Sala la reducción del plazo de información pública a su mitad no es relevante porque no ha producido efectiva indefensión. A juicio de la Sala, “no consta que el demandante (ni nadie) haya presentado alegaciones ni dentro ni fuera de plazo, ni que la falta de 15 días para alegaciones le haya privado de formular las mismas de manera efectiva y que tal falta haya trascendido, en su virtualidad anulatoria, al acto administrativo impugnado de manera material”.

Este criterio de reducir la importancia de los plazos de participación ciudadana a que no se produzca indefensión lo ha utilizado ya alguna vez el Tribunal Supremo (por ejemplo, en la STS de 1 de diciembre de 2009). Ese criterio es radicalmente contrario a lo pretendido por la política y la legislación ambientales comunitarias. En el ámbito medioambiental —y no solo en este—, con el establecimiento de trámites de participación, no se trata solo de que no se produzcan indefensiones. Se trata, asimismo, de que existan cauces apropiados que propicien una efectiva y real participación de los ciudadanos en la toma de decisiones ambientales. En la legislación española esos cauces siguen reducidos a los estrechos cauces del trámite de información pública. Y si ni siquiera se da relevancia al incumplimiento de los plazos legalmente establecidos en ellos, porque ello no supone indefensión del recurrente, vamos en dirección contraria a las exigencias de la buena administración ambiental.

La tercera sentencia trataba de un caso de impugnación de la autorización ambiental integrada de una central térmica. La STSJ de Navarra de 9 de junio de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\337611), inadmitió el recurso por falta de un particular. Este no acreditó que la actuación impugnada repercutiera en su esfera jurídica, que era, según

dice la Sentencia, “la única vía por la que éste podría hallarse legitimado para su impugnación”, ya que la acción popular prevista en la Ley 27/2006 se limita expresamente a personas jurídicas sin ánimo de lucro y en ningún caso puede reconocerse a las personas físicas.

Nada que objetar a las afirmaciones de la Sentencia. Pero quizá —sorprende también que el recurrente no lo hiciera— hubiera debido analizarse la acción pública que la Ley Foral de Intervención para la Protección Ambiental reconoce en su artículo 8 para exigir ante las administraciones competentes el cumplimiento de lo dispuesto en dicha Ley Foral.

### **3. El sonido de campanas de una iglesia es un uso tolerable y perteneciente a la tradición cultural española**

Dos vecinos de Pamplona solicitaron a su Ayuntamiento la adopción de medidas correctoras para que la iglesia de San Agustín controlara el ruido de sus campanas dentro de los términos impuestos por el Decreto Foral 135/1989. El silencio del Ayuntamiento ante esta solicitud fue recurrido y resuelto por la Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 17 de septiembre de 2010.

La Sentencia comienza recordando la doctrina del TC sobre el potencial lesivo del ruido, así como la normativa europea y estatal. Es fundamental señalar que el Decreto Foral invocado es anterior a la Ley del Ruido, mientras que el Ayuntamiento había dictado una ordenanza específica sobre niveles sonoros. Dicha ordenanza, “atendiendo a las prácticas consuetudinarias de la ciudad”, admite en horario diurno (de 8 a 22 horas) y con el límite de 90 decibelios, entre otros usos, las campanas de iglesias. Se cita también en la Sentencia una moción del Pleno del Senado del 2001 en la que se instaba al Gobierno a salvaguardar el uso de las campanas de iglesias y catedrales por considerarlas un elemento fundamental de la tradición cultural española que estamos obligados a proteger. También advierte la Sentencia que la iglesia es del siglo XVI, es decir, que tiene 500 años y que ya estaba en ese lugar cuando se construyeron las viviendas ocupadas por los recurrentes.

En virtud de todo lo anterior, la Sentencia concluye que “nos encontramos ante un uso perfectamente tolerable, sin perjuicio de su pertenencia innegable a la tradición cultural española y, además, dentro de los límites fijados en una Ordenanza Municipal que, a su vez, es coherente y respetuosa con la normativa vigente”.

### **5. Responsabilidad por daños causados por fauna silvestre**

La mayoría de las sentencias que se han dictado en este período por los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo versan sobre reclamaciones de responsabilidad por los daños causados por fauna silvestre. Dejando a un lado las que se centran exclusivamente en cuestiones probatorias, cabe destacar dos aspectos de interés.

- Forma de acreditación de los daños producidos (Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 28 de abril de 2010; Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 10 de mayo 2010; Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 24 de junio 2010). Se afirma en estas sentencias que la exigencia reglamentaria de presentar la factura de la reparación de los daños tiene por objeto acreditar la cuantía de los daños producidos. Si la realidad y cuantía de los daños resultan acreditados por otros medios, la no aportación de la factura es irrelevante y no es causa para denegar la reclamación de responsabilidad.
- Título de imputación de responsabilidad. La Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 26 de julio de 2010, rechazó que hubiera responsabilidad patrimonial de la Administración por los daños causados en un vehículo por irrupción en la calzada de un animal de una especie no identificada. Al desconocerse si el animal pertenecía o no a la fauna silvestre cinegética, el único título de imputación podía ser el deber de cuidado y conservación de la carretera. Sin embargo, de la sola irrupción de un animal no puede derivarse infracción del deber de cuidado de las carreteras. La Administración no puede ser garante del comportamiento y los movimientos de cualesquiera tipo de animales. Entenderlo de otra manera supondría considerar a la Administración como asegurador universal de toda incidencia que ocurra sobre la calzada. Por ello, la reclamación fue desestimada.

## 6. Relación de sentencias

### *6.1. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (Sala de lo Contencioso-Administrativo)*

STSJ de Navarra de 22 de abril de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\299326). Confirma una sanción en materia de caza, tras rechazar presuntas irregularidades formales.

STSJ de Navarra de 27 de abril de 2010, ponente Fernández Urzainqui (JUR 2010\299239). Se confirma una sanción en materia de residuos, por ser el recurso extemporáneo y sin que se aprecien motivos para anular la sanción.

STSJ de Navarra de 27 de abril de 2010, ponente Pueyo Calleja (JUR 2010\299240). Creación por un ayuntamiento de un acotado para su aprovechamiento micológico. Competencias de los concejos y presencia de un interés supraconcejil del Ayuntamiento. Irrelevancia de que el plazo de la información pública fuera menor al legalmente establecido por no ser causa de indefensión.

STSJ de Navarra de 17 de mayo de 2010, ponente Pueyo Calleja (JUR 2010\298626). Se confirma la inadmisión de una solicitud de autorización de licencia de obras de una estación de telefonía móvil por no estar incluida en el plan territorial de infraestructura que exige la legislación foral reguladora de las estaciones de telecomunicación por ondas electromagnéticas.

STSJ de Navarra de 2 de junio de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\337715). Concepto de modificación sustancial de un plan sectorial de incidencia supramunicipal a efectos de la necesidad de celebrar un nuevo trámite de información pública. No se infringen los derechos de información y participación en materia ambiental. Tampoco se vulnera el principio de precaución sin una prueba suficiente de la certeza del riesgo invocado.

STSJ de Navarra de 9 de junio de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\337611). Falta de legitimación de un particular para impugnar la autorización ambiental integrada de una central térmica. La acción popular de la Ley 27/2006 se refiere a personas jurídicas sin ánimo de lucro y en ningún caso a las personas físicas.

STSJ de Navarra de 23 de junio de 2010, ponente Pueyo Calleja (JUR 2010\337306). Se confirma la sanción a una central de producción de electricidad por carecer de las licencias preceptivas, apreciándose una negligencia grave en el recurrente por no haber verificado que contaba con las licencias necesarias para el funcionamiento de su actividad.

STSJ de Navarra de 24 de junio de 2010, ponente Rubio Pérez (JUR 2010\337252). Confirmación de la responsabilidad por los daños causados por abejarucos.

STSJ de Navarra de 29 de junio de 2010, ponente Pueyo Calleja (JUR 2010\337136). Anulación de una autorización ambiental integrada por unos informes periciales que desvirtúan los informes técnicos de la Administración.

STSJ de Navarra de 2 de julio de 2010, ponente Otero Pedrouzo (JUR 2010\336992). Confirma una sanción por cazar empleando medios de locomoción.

STSJ de Navarra de 12 de julio de 2010, ponente Abárzuza Gil. Confirma una sanción en materia de caza, tras rechazar presuntas irregularidades formales.

### *6.2. Sentencias de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo*

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 28 de abril de 2010: responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por los daños causados en un vehículo por colisión de este con una liebre. Habiéndose acreditado la realidad y cuantía de los daños, es irrelevante que no se haya presentado la factura de la reparación exigida por el Reglamento de caza y pesca.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 10 de mayo 2010: responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por los daños causados en un vehículo por colisionar este con un jabalí. Habiéndose acreditado la realidad y cuantía de los daños, es irrelevante que no se haya presentado la factura de la reparación exigida por el Reglamento de caza y pesca.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 10 de mayo 2010: responsabilidad patrimonial por los daños causados por buitres a la ovejas de una explotación ganadera. Posible imputación a la Administración de la Comunidad Foral

de Navarra no en la legislación de caza, sino en la de protección de la fauna silvestre, al ser los buitres una de las especies amenazadas en Navarra. Se desestima la reclamación por no haberse probado que fueran los buitres los causantes de la muerte de las ovejas.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 24 de junio 2010: responsabilidad patrimonial de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra por los daños causados en un vehículo por colisionar este con un jabalí. Habiéndose acreditado la realidad y cuantía de los daños, es irrelevante que no se haya presentado la factura de la reparación exigida por el Reglamento de caza y pesca.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 3, de 26 de julio de 2010: responsabilidad patrimonial por los daños causados en un vehículo por irrupción en la calzada de un animal de una especie no identificada. Se desestima la reclamación porque la Administración no puede ser garante de los movimientos de cualesquiera tipo de animales.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 1, de 29 de julio de 2010: no acreditación de los daños por los que se reclama responsabilidad patrimonial de la Administración.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 30 de julio de 2010: sanción a municipio por gestión incorrecta de residuos en un vertedero no controlado ubicado en una finca de su propiedad.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 1 de septiembre de 2010: sanción a minicentral eléctrica que funciona sin licencia de actividad ni de apertura.

Sentencia del Juzgado Contencioso-Administrativo núm. 2, de 17 de septiembre de 2010: el sonido producido por las campanas de una iglesia en horario diurno es un uso tolerable que pertenece a la tradición cultural española y que, además, respeta los límites fijados en la Ordenanza municipal.

### *6.3. Sentencias de Juzgados de lo Penal*

Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 3 de Pamplona, de 10 de junio de 2010: absuelve de un delito contra la fauna por no poder equipararse el método de caza ilegal utilizado con los del tipo penal por carecer aquel de similar eficacia destructiva.

Sentencia del Juzgado de lo Penal núm. 4 de Pamplona, de 30 de septiembre de 2010: condena por delito contra la fauna por cazar especies amenazadas (ranas bermejas).

**Sumari:** 1. Introducció. 2. Delicte ecològic. 3. Participació ciutadana i legitimació en matèria ambiental. 4. El so de campanes d'església és un ús tolerable i pertanyent a la tradició cultural espanyola. 5. Responsabilitat per danys causats per fauna silvestre. 6. Relació de sentències comentades. 6.1. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala Contenciosa Administrativa). 6.2. Sentències dels jutjats contenciosos administratius. 6.3. Sentències de jutjats penals.

## 1. Introducció

Durant el segon semestre de 2010, hi ha hagut un nombre notable de sentències de contingut ambiental en els tribunals navarresos. No obstant això, no han estat resolucions gaire rellevants des del punt de vista de la interpretació del dret ambiental. En moltes, l'element determinant ha estat la prova. En altres, s'hi al·legaven meres irregularitats del procediment sancionador o autoritzatori que eren rebutjades.

En aquesta crònica destacaré, en primer lloc, les sentències penals. Una és condemnatòria i l'altra, absolutòria. Aquesta és la més interessant per la interpretació que fa del tipus penal aplicable.

També és detonant el fet que tres sentències hagin hagut de pronunciar-se sobre diferents aspectes de participació i legitimació ambiental, i ho han de fer, com es veurà, amb un criteri bastant restrictiu.

S'ha pronunciat una altra sentència molt curiosa sobre el soroll causat per les campanes d'una església, en què admet aquest ús com a tolerable i pertanyent a la tradició cultural espanyola, si bé el factor determinant ha estat el compliment escrupolós de l'ordenança municipal que establia el règim especial per a campanes d'esglésies.

Finalment, al·ludeixo a diverses sentències dels jutjats contenciosos sobre reclamacions de responsabilitat per danys produïts a vehicles com a conseqüència d'accidents provocats per fauna silvestre cinegètica.

## 2. Delicte ecològic

En aquesta matèria han recaigut dues sentències dels jutjats penals. En una s'imposa una condemna per delicte contra la fauna per haver caçat espècies amenaçades (granotes rojes) (Sentència del Jutjat Penal núm. 4 de Pamplona, de 30 de setembre de 2010).

L'altra té més interès a establir un criteri restrictiu d'interpretació del tipus penal aplicable. L'article 336 CP sanciona conductes d'utilització de verins o d'explosius per a la caça o la pesca, així com "*de otros instrumentos o artes de similar eficacia destructiva para la fauna*" sense estar legalment autoritzat. La sentència considera que això significa que no tots els mètodes il·legals de caça estan inclosos en el tipus penal, perquè aquest només es refereix als més greus i de més eficàcia destructiva (verins, explosius), els quals poden afectar qualsevol espècie, i fins i tot l'aigua i la terra, i, a més a més, poden mantenir-ne els efectes negatius i lesius durant més temps. En aquest cas, s'havien utilitzat ceps armats amb esquer amb formigues d'ala per capturar ocells. La sentència considera que, tot i que actualment és un mètode prohibit, es tracta d'un sistema tradicional de caça que dista molt de tenir una eficàcia destructiva similar als que inclou expressament el CP, per la qual cosa absol l'acusat d'aquest delictes (Sentència del Jutjat Penal núm. 3 de Pamplona, de 10 de juny de 2010).

### **3. Participació ciutadana i legitimació en matèria ambiental**

En aquest àmbit s'han produït tres sentències. S'hi pot apreciar un criteri restrictiu i molt limitat de les possibilitats de participació dels ciutadans que la legislació ambiental pretén consolidar i generalitzar.

La STSJ de Navarra de 2 de juny de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\337715), tracta del recurs contra el Pla Sectorial d'Incidència Supramunicipal per implantar l'"Àrea d'Activitats Econòmiques". Entre els diversos motius d'impugnació interessa destacar el que es basa en la infracció del dret d'informació i de participació en processos que afecten el medi ambient. La part recurrent entenia que el projecte sotmès a informació pública i el que s'havia aprovat posteriorment eren de natura essencialment diferent, i, per tant, calia un tràmit nou d'informació pública. La sentència recorda el criteri jurisprudencial que l'alteració substancial dels plans no és merament quantitativa, sinó de concepte. En aquest cas, afegeix que la ubicació del projecte no s'ha alterat, ni conté altres afeccions, sinó que es restringeixen, atès que l'extensió del Pla s'ha reduït a menys de la meitat de l'espai projectat inicialment. En conseqüència, es rebutja qualsevol vulneració del dret de participació en processos ambientals.

En la STSJ de Navarra de 27 d'abril de 2010, ponent Pueyo Carreró (JUR 2010\299240), es va tractar de la creació d'un tancat per un Ajuntament per al seu aprofitament micològic. Després d'haver rebutjat altres arguments de la part recurrent, la Sala s'enfronta a l'incompliment del termini d'un mes d'informació pública que fixava el Reglament de Montes. Doncs bé, per la Sala, la reducció del termini d'informació pública a la meitat no és rellevant perquè no ha produït indefensió efectiva. Segons el parer de la Sala, *“no consta que el demandante (ni nadie) haya presentado alegaciones ni dentro ni fuera de plazo, ni que la falta de 15 días para alegaciones le haya privado de formular las mismas de manera efectiva y que tal falta haya trascendido, en su virtualidad anulatoria, al acto administrativo impugnado de manera material”*.

Aquest criteri de reduir la importància dels terminis de participació ciutadana fins que no es produeixi indefensió ja l'ha utilitzat alguna vegada el Tribunal Suprem (per exemple, en la STS d'1 de desembre de 2009). Aquest criteri és radicalment contrari al que han pretès la política i la legislació ambiental comunitària. L'àmbit mediambiental —i no sols en aquest—, amb l'establiment de tràmits de participació, no es tracta només que no es produeixin indefensions. Es tracta, així mateix, que existeixin vies apropiades que propiciïn la participació dels ciutadans efectiva i real en la presa de decisions ambientals. En la legislació espanyola, aquestes vies continuen reduïdes a les vies estretes del tràmit d'informació pública. I si ni tan sols es dóna rellevància a l'incompliment dels terminis legalment establerts, perquè això no suposa indefensió de la part recurrent, anem en direcció contrària a les exigències de la bona administració ambiental.

La tercera sentència tractava d'un cas d'impugnació de l'autorització ambiental integrada d'una central tèrmica. La STSJ de Navarra de 9 de juny de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\337611), va inadmetre el recurs per falta de particular. Aquest no va acreditar que l'actuació impugnada repercutís en la seva esfera jurídica, que era, segons diu la sentència, *“la única vía por la que éste podría hallarse legitimado para su impugnación”*, ja que l'acció popular prevista en la Llei 27/2006 es limita expressament a persones jurídiques sense ànim de lucre, i en cap cas no pot reconèixer-se a les persones físiques.

Res a dir sobre les afirmacions de la sentència. Però potser —sorpren també que la part recurrent no ho fes— s’hagués hagut d’analitzar l’acció pública que la llei foral d’intervenció per a la protecció ambiental reconeix en l’article 8 a fi d’exigir davant les administracions competents el compliment del que disposa aquesta llei foral.

### **3. El so de campanes d’església és un ús tolerable i pertanyent a la tradició cultural espanyola**

Dos veïns de Pamplona van sol·licitar a l’Ajuntament que adoptés mesures correctores perquè l’església de Sant Agustí controlés el soroll de les campanes segons els termes que imposa el Decret foral 135/1989. El silenci de l’Ajuntament davant aquesta sol·licitud es va recórrer i es va resoldre mitjançant la Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 17 de setembre de 2010.

La sentència comença recordant la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el potencial lesiu del soroll, així com les normatives europea i estatal. És fonamental assenyalar que el decret foral invocat és anterior a la llei del soroll, mentre que l’Ajuntament havia dictat una ordenança específica sobre nivells sonors. L’ordenança, “*atendiendo a las prácticas consuetudinarias de la ciudad*”, admet en horari diürn ( de 8 a 22 hores) i amb límit de 90 decibels, entre altres usos, les campanes d’esglésies. En la sentència també s’esmenta la moció del Ple del Senat de 2001 en la qual s’instava el Govern a salvaguardar l’ús de les campanes d’esglésies i catedrals perquè les considerava un element fonamental de la tradició cultural espanyola que estem obligats a salvaguardar. La sentència també adverteix que l’església és del segle XVI, és a dir, que té 500 anys i que ja era en aquest lloc quan es van construir els habitatges ocupats per la part recurrent.

En virtut de tot l’anterior, la sentència conclou que “*nos encontramos ante un uso perfectamente tolerable, sin perjuicio de su pertenencia innegable a la tradición cultural española y, además, dentro de los límites fijados en una Ordenanza Municipal que, a su vez es coherente y respetuosas con la normativa vigente*”.

### **5. Responsabilitat per danys causats per fauna silvestre**

La majoria de les sentències que els jutjats contenciosos administratius han dictat durant aquest període versen sobre reclamacions de responsabilitat per danys causats per fauna silvestre. Deixant de banda les que se centren exclusivament en qüestions probatòries, cal destacar-ne dos aspectes d'interès.

- Forma d'acreditació dels danys produïts (Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 28 d'abril de 2010; Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 10 de maig 2010; Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 24 de juny 2010). En aquestes sentències s'afirma que l'exigència reglamentària de presentar la factura de la reparació dels danys té com a objecte acreditar la quantia dels danys produïts. Si la realitat i la quantia dels danys es poden acreditar per altres mitjans, el fet de no aportar factura és irrellevant i no és causa per denegar la reclamació de responsabilitat.

- Títol d'imputació de responsabilitat. La Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 26 de juliol de 2010, va rebutjar que hi hagués responsabilitat patrimonial de l'Administració pels danys causats en un vehicle perquè un animal d'espècie no identificada va irrompre en la calçada. Com que es desconeixia si l'animal pertanyia o no a la fauna silvestre cinegètica, l'únic títol d'imputació podia ser el deure d'atendre a la carretera i de conservació de la carretera. No obstant això, de l'única irrupció d'un animal no pot derivar-se cap infracció del deure d'atendre a les carreteres. L'Administració no pot ser garant del comportament i dels moviments de qualsevol animal. Entendre-ho d'una altra manera suposaria considerar l'Administració com a asseguradora universal de tota incidència que ocorri en la calçada. Per això, la reclamació es va desestimar.

## **6. Relació de sentències**

### *6.1. Sentències del Tribunal Superior de Justícia de Navarra (Sala Contenciosa Administrativa)*

STSJ de Navarra de 22 d'abril de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\299326). Confirma una sanció en matèria de caça, després d'haver rebutjat presumptes irregularitats formals.

STSJ de Navarra de 27 d'abril de 2010, ponent Fernández Urzainqui (JUR 2010\299239). Es confirma una sanció en matèria de residus, perquè el recurs era extemporani i no s'identificaven motius per anul·lar la sanció.

STSJ de Navarra de 27 d'abril de 2010, ponent Pueyo Carreró (JUR 2010\299240). Creació d'un tancat per part d'un Ajuntament per al seu aprofitament micològic. Competències dels consells i presència d'interès supramunicipal de l'Ajuntament. Irrellevància que el termini de la informació pública fóra menor al que s'estableix legalment per no haver estat causa d' indefensió.

STSJ de Navarra de 17 de maig de 2010, ponent Pueyo Carreró (JUR 2010\298626). Es confirma la inadmissió d'una sol·licitud d'autorització de llicència d'obres d'una estació de telefonia mòbil perquè no estava inclosa en el Pla Territorial d'Infraestructura que exigeix la legislació foral reguladora de les estacions de telecomunicació per ones electromagnètiques.

STSJ de Navarra de 2 de juny de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\337715). Concepte de modificació substancial de Pla Sectorial d'Incidència Supramunicipal als efectes de la necessitat de realitzar un nou tràmit d'informació pública. Els drets d'informació i de participació en matèria ambiental no s'infringeixen. Tampoc no es vulnera el principi de precaució sense cap prova suficient de la certesa del risc invocat.

STSJ de Navarra de 9 de juny de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\337611). Falta de legitimació d'un particular per impugnar l'autorització ambiental integrada d'una central tèrmica. L'acció popular de la Llei 27/2006 es refereix a persones jurídiques sense ànim de lucre i no a persones físiques.

STSJ de Navarra de 23 de juny de 2010, ponent Pueyo Carreró (JUR 2010\337306). Es confirma la sanció a una central de producció d'electricitat perquè no tenia les llicències preceptives, i es va detectar una negligència greu en la part recurrent per no haver verificat que tenia les llicències necessàries per fer funcionar la seva activitat.

STSJ de Navarra de 24 de juny de 2010, ponent Rubio Pérez (JUR 2010\337252). Confirmació de la responsabilitat per danys causats per abellerols.

STSJ de Navarra de 29 de juny de 2010, ponent Pueyo Carreró (JUR 2010\337136). Anul·lació de l'autorització ambiental integrada pels informes pericials que desvirtuen els informes tècnics de l'Administració.

STSJ de Navarra de 2 de juliol de 2010, ponent Turó Pedrouzo (JUR 2010\336992). Confirma una sanció per haver caçat emprant mitjans de locomoció.

STSJ de Navarra de 12 de juliol de 2010, ponent Abárzuza Gil. Confirma una sanció en matèria de caça, després d'haver rebutjat presumptes irregularitats formals.

### *6.2. Sentències dels jutjats contenciosos administratius*

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 28 d'abril de 2010: responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra pels danys causats en un vehicle per haver col·lidit amb una llebre. Havent-se'n acreditat la realitat i la quantia dels danys, el fet que no s'hagi presentat la factura de la reparació que exigeix el Reglament de caça i pesca és irrellevant.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 10 de maig 2010: responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra pels danys causats en un vehicle per haver col·lidit amb un porc senglar. Havent-se'n acreditat la realitat i la quantia dels danys, el fet que no s'hagi presentat la factura de la reparació que exigeix el Reglament de caça i pesca és irrellevant.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 10 de maig 2010: responsabilitat patrimonial per danys causats per voltors a ovelles d'una explotació ramadera. Possible imputació a l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra no en la legislació de caça, sinó en la de protecció de fauna silvestre, ja que els voltors són una de les espècies amenaçades a Navarra. Es desestima la reclamació per no haver-se provat que els voltors fossin els causants de la mort de les ovelles.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 24 de juny 2010: responsabilitat patrimonial de l'Administració de la Comunitat Foral de Navarra pels danys causats en un vehicle per haver col·lidit amb un porc senglar. Havent-se'n acreditat la realitat i la quantia dels danys, el fet que no s'hagi presentat la factura de la reparació que exigeix el Reglament de caça i pesca és irrellevant.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 3, de 26 de juliol de 2010: responsabilitat patrimonial pels danys causats en un vehicle perquè un animal d'espècie no identificada va irrompre en la calçada. Es desestima la reclamació perquè l'Administració no pot ser garant dels moviments de qualsevol animal.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 1, de 29 de juliol de 2010: no acreditació dels danys pels quals es reclama responsabilitat patrimonial de l'Administració.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 30 de juliol de 2010: sanció a un municipi per haver gestionat de manera incorrecta els residus d'un abocador no controlat ubicat en una finca seva.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, d'1 de setembre de 2010: sanció a una mini-central elèctrica que funciona sense llicència d'activitat i d'obertura.

Sentència del Jutjat Contenciós Administratiu núm. 2, de 17 de setembre de 2010: el so produït per les campanes d'una església en horari diürn és un ús tolerable, que pertany a la tradició cultural espanyola i que, a més a més, respecta els límits fixats en l'Ordenança municipal.

### *6.3. Sentències de jutjats penals*

Sentència del Jutjat Penal núm. 3 de Pamplona, de 10 de juny de 2010: absol d'un delicte contra la fauna perquè el mètode de caça il·legal utilitzat no es pot equiparar amb els del tipus penal, ja que no té la mateixa eficàcia destructiva.

Sentència del Jutjat Penal núm. 4 de Pamplona, de 30 de setembre de 2010: condemna per delicte contra la fauna per haver caçat espècies amenaçades (granotes rojes).